

ANTE EL MOMENTO POLITICO- ECONOMICO

El reciente ajuste ministerial tuvo el signo predominante de una reafirmación de la línea gubernativa seguida hasta ahora, tanto en lo político como en lo económico. Sin embargo, para obtener todos los frutos que de ello cabe esperar, parece indispensable un análisis más detenido de las principales circunstancias que rodearon tal decisión.

Desde luego, resultaría ciego desconocer que las últimas semanas que precedieron al mencionado ajuste del Gabinete, estuvieron cargadas de rumores e incertidumbre. No sería aventurado presumir, incluso, que el adelanto en un mes respecto de la fecha en que tradicionalmente han tenido lugar las reorganizaciones ministeriales durante los últimos años, no fue ajeno al propósito de calmar ese clima.

En efecto, las dificultades impuestas por el ajuste recesivo de nuestra economía, se han prestado para diversas hipótesis sobre posibles variaciones del modelo económico vigente.

Se entremezclan en ello quienes siempre han buscado el retorno a fórmulas estatistas contrapuestas a la esencia del esquema vigente, con quienes afectados en sus intereses personales buscan ansiosamente cualquier salida que les evite el deterioro patrimonial a que los aboca el camino escogido por el Gobierno para el mencionado ajuste recesivo. Justo es añadir también a quienes creen



que éste podría lograrse de modo menos doloroso y grave, a través de medidas que íntimamente consideran compatibles con el esquema vigente. Nadie, eso sí, parece responsabilizarse de auspiciar una estrategia global distinta a la gubernativa para afrontar la coyuntura económica, ante la dificultad de medir con mayor certeza las consecuencias que se derivarían de cualquier alternativa.

Lo cierto es que más allá del debate económico de fondo, la actitud del Gobierno en la materia tiene implicancias políticas inmediatas, cuyo enfoque no podría soslayarse, y que además repercuten en el desenlace de la cuestión económica misma.

¿Cómo explicarse que la intervención realizada en julio pasado por el Ministro Sergio De Castro, con motivo de la exposición de la Hacienda Pública, haya surtido tan breve efecto en cuanto a llevar a la opinión pública al conocimiento de que el rumbo ahí señalado para enfrentar el cuadro recesivo, sería el único válido para el Gobierno?

¿Cómo explicarse que tampoco haya bastado para ello, la posterior intervención personal del Presidente Pinochet a fines de septiembre (en el Salón Arturo Prat del Club de La Unión), reafirmando la continuidad tanto de la persona del Ministro de Hacienda en su cargo, como de la línea anunciada por éste a la ciudadanía?

¿Cómo explicarse que ni siquiera haya sido suficiente al efecto, el aún más reciente aserto presidencial de que el modelo económico constituye "un viaje sin retorno"?

Parte significativa de las respuestas a dichas interrogantes, debe buscarse en la fuerte presión que ciertos sectores empresariales partidarios de alterar la receta señalada para el ajuste

recesivo, han procurado ejercer sobre las autoridades, dirigiendo su influencia incluso directamente hacia sectores castrenses, en el propósito de sobrepasar así a los máximos colaboradores civiles del Jefe del Estado en el área económica, e imponer ciertas medidas "correctivas" al margen de éstos o por medio de su reemplazo. Sin embargo, acaso esto no habría sido capaz de generar por sí solo un ambiente tan extendido de rumores e incertidumbre, si no se hubiese añadido la sensación de que efectivamente el Gobierno estaba abierto a recibir sugerencias, por canales paralelos y diversos a los de las autoridades económicas oficiales.

Está ciertamente fuera de duda la conveniencia de que el Gobierno ejerza con toda amplitud, sus facultades de recabar el mayor número de puntos de vista que estime necesarios para el debido análisis y resolución de los problemas. Lo que, en cambio, parece necesario cuidar hacia el futuro, es de que eso no produzca una imagen de eventuales paralelismos en las tareas asesoras del Jefe del Estado, ya que la sola sensación de que ello pudiere ocurrir —aún cuando en realidad no fuere exacto— coloca en entredicho la estabilidad de políticas tan sensibles a aspectos psicológicos, como la económica.

En la medida en que se piense que las personas y el rumbo escogido frente a una situación recesiva pueden cambiar, los afectados por ésta demoran las decisiones pertinentes para adaptarse a la nueva realidad, y con ello producen el efecto de agravar la crisis y el costo del ajuste requerido. En otras palabras, en materias como ésta, las expectativas terminan por gravitar efectivamente sobre la realidad.

Lo anterior tiene especial relevancia, si agregamos al cuadro el giro experimentado por la oposición política

después del plebiscito del año pasado, y de la entrada en vigencia de la nueva Carta Fundamental, en marzo último.

La existencia de un amplio respaldo popular mayoritario hacia el Gobierno, y el afianzamiento de éste a través de un cauce jurídico-político sólido y proyectado al futuro, ha tenido entre otros efectos positivos, el de desalentar aún a los opositores más tenaces, en cuanto a la factibilidad de cualquier intento próximo o directo de desestabilización del régimen que encabeza el Presidente Pinochet.

No obstante, junto con constatar el factor positivo que ello encierra, es menester advertir los riesgos que presenta el obligado cambio de la estrategia opositora. Convencida de la evidencia descrita, la oposición política centra ahora sus fuegos hacia el **interior** de las Fuerzas Armadas y de Orden, procurando hacerlas vacilar respecto del camino escogido por el actual Gobierno durante estos ocho años, y presentando su tradición histórica siempre identificada con una postura socialmente progresista, como supuestamente contraria al modelo económico imperante. En lugar del ataque frontal e indiscriminado contra la gestión del Gobierno militar, característico de la actitud opositora entre 1973 y 1980, sus voces prefieren ahora entonar más bien melodías que invitan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden a una "reflexión", a través de la cual intentan desviar al régimen de su orientación seguida hasta el presente.

Ante el conjunto de factores reseñados, el liderazgo del Presidente Pinochet resurge en toda su importancia. Sólo su prestigio político y castrense es un elemento idóneo para sortear una vez más los escollos descritos.

De ahí la trascendencia de que en una

decisión sin precedentes durante el actual Gobierno, el Presidente de la República haya confirmado inmediatamente después de la renuncia del Gabinete, sólo a cuatro de sus Ministros, postergando en una semana la decisión sobre el resto.

Estimamos inadecuada cualquier interpretación de esta medida que pudiere pretender conclusiones lesivas para la similar confianza que el Jefe del Estado dispensa a todos sus colaboradores. Pero consideraríamos igualmente erróneo no ver las amplias y favorables proyecciones del signo político que el Presidente Pinochet ha señalado de hecho con su decisión.

Desde luego, el Presidente Pinochet dio con ello una clara señal reafirmadora de la línea política y económica, al confirmar de inmediato en sus cargos a los Ministros que encabezan las áreas respectivas del Gabinete. En el frente interno, ello se personifica especialmente en los Ministros Sergio Fernández y Sergio de Castro, como las figuras civiles de mayor continuidad en la confianza presidencial, estrechamente ligadas además entre ellas por una unidad de criterios y estilos.

La reafirmación particularmente ostensible que el Presidente Pinochet ha demostrado de esa confianza, desestima una vez más a quienes se amparan en una supuesta adhesión al Jefe del Estado y al Gobierno en cuanto expresión de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para atacar sistemática y simultáneamente a sus principales líneas de acción y a sus más relevantes colaboradores civiles, simbolizados en los Ministros del Interior y de Hacienda, a quienes combaten con especial encono.

Si a ello se suma la permanencia del grueso del Gabinete, confirmado posteriormente, queda de manifiesto el afiatamiento de un "equipo de go-

bierno", como un todo homogéneo que colabora en forma mancomunada con el Presidente de la República, tendiendo a superarse así no sólo cualquier especulación sobre presuntas discrepancias internas, sino también el cierto sesgo que implicaba el término "equipo económico", empleado durante los últimos años.

La nueva realidad que se robustece progresivamente en cuanto a un "equipo de gobierno" integrador de uniformados y civiles, del frente interno con el externo, y del área política con la económica, emerge como el camino más idóneo para afrontar la dura etapa que será necesario atravesar, y cuyos efectos ya han empezado a sentirse.

El otro elemento que parece especialmente importante reforzar, a fin de otorgar solidez perdurable a una economía social de mercado, es el de crear las condiciones que favorezcan un restablecimiento de la confianza del Gobierno hacia los empresarios, factor insustituible de un adecuado desarrollo de toda economía libre.

Nuestra revista ha acentuado desde hace varios meses, la urgencia de que se complete una normativa jurídica apropiada y suficiente para regular la actividad económica, dentro de los marcos propios de un Estado subsidiario. Hemos insistido, asimismo, en el imperativo de que ella se aplique a través de funcionarios ágiles y eficientes, particularmente en lo que toca a la tarea estatal fiscalizadora. Hemos reiterado, en fin, el aporte que desde su perspectiva compete al sector privado, en cuanto a crear sistemas propios para velar por una conducta ética rigurosa de parte de los empresarios,

ya que su ascendiente moral y su prestigio cívico —en cuanto agentes decisivos de una economía libre— resulta esencial para el buen desarrollo de ésta, en el mediano y largo plazo.

No obstante y sin perjuicio de reiterar tales predicamentos, estimamos oportuno enfatizar también la inconveniencia de favorecer una injusta generalización de un juicio negativo hacia el empresario chileno, creada a base de extrapolar en forma indebida a todo un sector ciudadano, ciertas conductas inconvenientes y censurables de algunos de ellos.

Crear un antagonismo o un recelo generalizado entre Gobierno y empresarios, y más aún entre los uniformados y los hombres de empresa, es uno de los más preciados anhelos de quienes ven en ello un medio seguro de frustrar a la larga el modelo económico vigente, que tan buenos resultados ha permitido alcanzar al país, con el consiguiente prestigio interno y externo para el actual régimen.

Restablecer pues una sana confianza recíproca entre dichos sectores, por desgracia erosionada en los últimos meses, emerge como uno de los desafíos actualmente prioritarios para el destino del régimen y de su modelo económico-social, y requiere por ello del esfuerzo de ambas partes involucradas en tal relación, aunque en el muy diverso grado y forma que a cada una de ellas concierne.

Sólo así Chile logrará superar las actuales repercusiones de la crisis económica mundial que nos afectan, y continuar proyectándose hacia los horizontes de libertad y progreso que inspiran el ideario gubernativo.

R